

ADOLFO PEREZ PORTILLO

Tesis

T.D
79

CONSTITUCION MONARQUICA

Y

REPUBLICA FEDERAL

INFLUENCIA DE LAS LEYES ESPAÑOLAS

EN LAS

PRIMERAS CONSTITUCIONES PROVINCIALES

ARGENTINAS

(1819-1824)

USAL
UNIVERSIDAD
DEL SALVADOR

3H2, H

S U M A R I O

LAS CONSTITUCIONES PROVINCIALES CODIFICADAS

El ciclo de institucionalización federal de las Provincias.

- I. SANTA FE. Estanislao López, Gobernador de Santa Fe. El Estatuto Provisorio de la Provincia de Santa Fe (1819). El Gobierno. La Representación Provincial. El Cabildo. La Junta de Hacienda. La seguridad individual. La ciudadanía. La Religión.
- II. TUCUMAN. La Provincia Federal. La Constitución de la República de Tucumán (1820). Las Leyes Constitucionales de Tucumán.
- III. CORDOBA. El Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración de la Provincia de Córdoba (1821). La Provincia de Córdoba. La ciudadanía. Elecciones. Los Representantes. El Poder Legislativo. El Poder Ejecutivo. El Poder Judicial. Organización tribunalcia. Juzgados de Comercio. Poder Judicial Federal. La suspensión de los derechos constitucionales. Los Cabildos. Las milicias.
- IV. SALTA. Constitución de la Provincia de Salta (1821). La Representación Provincial. El Gobierno. La Administración de Justicia.
- V. CORRIENTES. Reglamento Provisorio Constitucional de la Provincia de Corrientes (1821). La Religión. La ciudadanía. El Poder Legislativo. El Gobierno. Atribuciones. Facultades extraordinarias. Límites del Gobierno. La estabilidad de los empleados públicos. La seguridad individual. Asambleas electorales. El Poder Judicial. El Cabildo.
La Constitución de la Provincia de Corrientes (1824). Religión. Ciudadanía. Asambleas Electorales. El Congreso General. El Congreso Permanente. El Poder Ejecutivo. El Poder Judicial. El nuevo cuadro institucional.
- VI. ENTRE RÍOS. La República de Ramírez. Reglamento para el Orden de los Departamentos de la República Entrerriana y para el Orden Militar (1820). La institucionalización entrerriana. El Estatuto Provisorio Constitucional de la Provincia de Entre Ríos (1822). El Congreso Provincial. El Gobierno. Poder Judicial. Derechos de la Provincia. Derechos particulares. Ciudadanía y naturalización. La Constitución entrerriana.

VII. CATAMARCA. La Provincia Federal de Catamarca. Reglamento Constitucional para la nueva Provincia de Catamarca (1823). La ciudadanía. Religión. El Gobierno Provincial. El Poder Legislativo. La formación de leyes. El Gobernador-Intendente. Atribuciones. Las facultades extraordinarias. El Poder Judicial. El Cuerpo Municipal. Las milicias de la Provincia. El Juicio de residencia.

LAS LEYES CONSTITUCIONALES PROVINCIALES.

- I. SANTIAGO DEL ESTERO. El Acta de Autonomía. La Junta Electoral.
- II. MENDOZA. La Provincia Federal. Disolución de la Intendencia de Cuyo. Creación de la Legislatura. Las "Ordenanzas Provisionales". La supresión del Cabildo.
- III. SAN JUAN. La Autonomía. La Sala de Representantes. La Carta de Mayo.
- IV. SAN LUIS. El Acta de Autonomía. El Cabildo-Gobernador.
- V. LA RIOJA. La Autonomía. La Sala de Representantes.
- VI. BUENOS AIRES. Las consecuencias de Cepeda. El Cabildo-Gobernador. Creación de la Junta de Representantes. Resoluciones de la Junta en la reunión del 4 de marzo de 1820. La reunión del 30 de abril de 1820. Las Leyes Constitucionales. La primera Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Poder Legislativo. Facultades de la Sala de Representantes. Comisión Permanente. Gobierno. Administración de Justicia. Las garantías individuales y la represión. La Ley de inviolabilidad de las propiedades. La Ley de seguridad individual. La Ley de vagos. La Ley de Elecciones.

LOS TRATADOS INTERPROVINCIALES

- I. Tratado del Pilar (1820). Cláusulas federativas. Cláusulas económicas. Ayuda militar. Amnistía política.

- II. Congreso de Avalos (1820). Cláusulas federativas.
- III. Tratado de Benegas (1820). Cláusulas federativas. Cláusulas militares.
- IV. Tratado de Vinará (1821). Cláusulas federativas. Cláusulas económicas. Amnistía política y liberación de prisioneros.
- V. Tratado de Alianza entre Tucumán y Santiago del Estero (1821). Cláusulas federativas.
- VI. Convenio entre los Gobernadores de Buenos Aires y Santa Fe como base para terminar la guerra con Entre Ríos y para que ésta deje en libertad de acción a las Provincias de Corrientes y Misiones (1821). Cláusulas federativas. Cláusulas económicas.
- VII. Tratado del Cuadrilátero (1822). Cláusulas federativas. Cláusulas económicas. Ayuda militar. Prisioneros y desertores.
- VIII. Tratado de San Miguel de las Lagunas (1822). Constitución o Reglamento Provisional para los Pueblos Unidos de Cuyo (1821). Pacto de San Miguel de las Lagunas. Manifiesto de la Convención Provincial de los Pueblos de Cuyo dirigido a las Provincias de Sud América que fundamenta el Pacto de San Miguel de las Lagunas.
- IX. Tratado de Alianza ofensiva y defensiva celebrado entre el Gobierno de la Provincia de Santa Fe y el Cabildo de Montevideo (1823). Cláusulas militares.
- X. Tratado entre Santa Fe y Entre Ríos, de ayuda a la Provincia Oriental (1823). Tratado entre Santa Fe, Entre Ríos y el Cabildo de Montevideo, de la misma fecha.
- XI. Convención de San Miguel de alianza ofensiva y defensiva entre las Provincias de Entre Ríos y Misiones (1823). Cláusulas federativas. Cláusulas militares. Cláusulas económicas. Cláusulas eclesiásticas.

LA ORGANIZACION CONSTITUCIONAL DE LAS PROVINCIAS ARGENTINAS

El ciclo de institucionalización federal de las provincias.

Con la batalla de Cepeda y sus consecuencias se abre, definitivamente, el ciclo de institucionalización federal de las provincias reclamado por los pueblos del antiguo Virreinato desde los sucesos de Mayo de 1810. Insistimos en la calificación de federal de la institucionalización provincial, porque las provincias no habían dejado, en ningún momento, de tener instituciones funcionando con plenitud. Desde que el último Virrey cesara en Buenos Aires, las provincias se vieron obligadas a utilizar las antiguas instituciones de las Leyes de Indias frente a la discontinuidad del poder central que seguía funcionando en Buenos Aires. Es así que una de esas instituciones creció a una altura singular: el Cabildo, Regimiento y Justicia de las ciudades provincianas. Los cuatro ramos de Gobierno, Justicia, Milicia y Hacienda siguieron administrándose por los magistrados locales y los gobernantes que sucesivamente llegaban con designaciones de la Capital. Entre la gestión, accidentada generalmente, de cada uno de estos últimos, el Cabildo-Gobernador llenaba los vacíos con plena legitimidad y reconocimiento popular.

El paso a la autonomía federal, es decir, a la afirmación del autogobierno provincial, va a proyectar otra institución de la antigua constitución castellana: el Gobernador, Alguacil Mayor y Capitán General, predecesor centenario del Gobernador-Intendente. En la nueva circunstancia federal aquél conservará todos sus antiguos atributos y, a consecuencia de los tiempos de guerra que deberá afrontar, repetirá su tradicional supremacía sobre la corporación capitular.

El proceso que se inicia, por otra parte, viene flanqueado por influencias doctrinarias que afectarán la continuidad del Cabildo dada su tipicidad hispánica y su funcionalidad contrapuesta a los principios entonces en boga. La doctrina de la división de poderes, común a federales doctrinarios y a centralistas, va a reforzar la institución gubernamental en desmedro del Ayuntamiento, a lo que se sumará la necesidad de un órgano legislativo que reemplace a las instituciones del poder central disuelto, en el ámbito local. Por un tiempo, la justicia seguirá siendo administrada por los al-

caldes capitulares, pero la manfa modernizante también avanzará sobre ellos y los transformará en jueces, desligándolos del Ayuntamiento y subordinándolos directamente al Gobernador. La policía, tradicional atribución comunal, también pasará al "ejecutivo".

El crecimiento desmesurado del poder del Gobernador será consecuencia natural del desmantelamiento paulatino e interrumpido de la antigua constitución y su reemplazo por principios doctrinarios sin raigambre ni efectividad alguna.

Por debajo de la institución real -el Gobernador- y de las puramente nominales -Junta de Representantes y justicia- seguirán discutiendo las viejas leyes castellanas administrando con prudencia y ánimo cristiano las adjudicaciones de obligaciones y derechos de la misma forma en que, sin interrupción alguna, lo habían venido haciendo durante los trescientos años anteriores.



USAL
UNIVERSIDAD
DEL SALVADOR

Estanislao López, Gobernador de Santa Fe.

Mariano Vera se había retirado de Santa Fe luego de ver entornada por el Cabildo, su elección a la Gobernación de la provincia. Quedó el Ayuntamiento como Cabildo-Gobernador ante la resistencia de gran parte de la población santafecina. El enfrentamiento parecía inevitable cuando el círculo capitular impulsó un movimiento que llevaba a su cabeza al Comandante de Armas de la Provincia, el teniente coronel Estanislao López. Este se hizo cargo del gobierno en un pronunciamiento que dejó de lado las formas constitucionales.

No tuvo tiempo López para regularizar su situación legal ni para encargar las urgentes medidas de gobierno que reclamaba la Provincia. El Ejército de Observación directorial por el Sur y destacamentos del Ejército del Norte por la frontera occidental, invadieron Santa Fe. Luego de una campaña en la cual reveló sus magníficas dotes de conductor militar, la impotencia directorial y la intervención de San Martín decidieron a los jefes de los ejércitos de Buenos Aires a firmar el armisticio de San Lorenzo, el 5 de abril de 1819.

López, que dirigía sus mensajes al Ayuntamiento santafecino con el título de Cabildo-Gobernador, y que se consideraba usurpador del cargo, requirió una convocatoria al pueblo para elegir gobernador. El 8 de julio de 1819 se realizó la elección y, en ella, fue elegido López, legalizando así su situación.

Desde los tiempos de Mariano Vera se encontraba constituida una Junta Electoral de la provincia, encargada de redactar una Constitución. Al ser elegido Estanislao López, dicho cuerpo produjo un código, que desconocemos, pero que, por el rechazo que provocó en López y los conceptos/^{en}que manifiesta su repudio, debían incluir la división de poderes, el uso de las constituciones por entonces en circulación. En reemplazo de este código, Estanislao López promulgó el Estatuto que regiría largos años a la provincia.

El Estatuto Provisorio de la Provincia de Santa Fe. (1819)

Es este el primero de los códigos constitucionales provinciales que inicia el ciclo de la institucionalización federal argentina. Con anterioridad, en 1813, Artigas había dado un Reglamento a la Provincia Oriental y Belgrano, en 1811, a la provincia de Misiones, pero ambos tuvieron escasa vigencia debido a la ocupación correntina de esta provincia y a la anexión portuguesa de aquella. El Estatuto santafecino, en cambio, mantuvo su vigor hasta más allá del período inicial de institucionalización federal, pues recién fue reformado en 1841, ya en plena vigencia de la Confederación Argentina.

El Estatuto, dictado el 26 de agosto de 1819, consta de 59 artículos en total, dividido en nueve secciones, tituladas: I; Religión del país; II, De la ciudadanía; III, Representación de la provincia. La IV sección se divide, a su vez, en tres capítulos, siendo el I referido al Gobierno; el II, a la "Forma de su elección", y el III, a las "Facultades del Gobierno". Las restantes secciones tratan, respectivamente, del Cabildo, Administración de Justicia, Junta de Hacienda, Seguridad Individual y la última, del reconocimiento debido al Reglamento provisorio, -es decir, al Estatuto provincial-, de su juramento por todas "las autoridades y corporaciones" existentes y las que se promovieren, y la vigencia de todas las normas de administración anterior, "en cuanto no estén en oposición al presente Estatuto."

El Gobierno

El Gobernador o caudillo de la provincia, es la principal institución de Gobierno. Su elección se realice por sufragio universal, ya que, como expresa el artículo 19 del Estatuto: "Siendo uno de los actos más esenciales de la libertad del hombre el nombramiento de su caudillo, ... elegirán personalmente al que deba emplearse en el Gobierno."

Su mandato tiene una duración de dos años, no determinándose trabaje alguna para su reelección. Tiene que estar en ejercicio de la ciudadanía y tener, como mínimo, treinta años de edad. Al concluir

su período, "dará cuenta de su administración ante su sucesor".

(art. 17)

Sus facultades son muy amplias. Puede "convocar la representación "en los casos que estime conveniente a la salud del país." (art. 22); efectúa los "ajustes de paz con cualquier Estado o provincia enemiga, bajo las bases que se le hayan prescrito", sin que se especifique en el Estatuto quién o qué organismo deberá "prescribir" "las bases" a que deberá ajustarse el Gobernador; declara la guerra con acuerdo de la Junta Electoral "que deberá reunirse para este acto "a lo menos dos terceras partes." (art. 24); nombra y remueve a los empleados públicos, "siendo responsables de su mala versación" (sic) (art. 26); tiene la facultad de indultar, salvo cuando el delito sea de traición a la Patria (art. 27); fija los sueldos de los empleados públicos civiles y militares (art. 28); sentencia, revoca y confirma en apelación, "todas las causas civiles y criminales, a excepción de aquellas que son de su privativo conocimiento", (art. 29), y preside la Junta de Hacienda de la Provincia (art. 43). Además, sin que el Estatuto lo señale, el Gobernador es, por su propia naturaleza, el jefe de todas las milicias provinciales y cívicas. Reúne, por lo tanto, las funciones relativas a los cuatro ramos de Gobierno de la clásica escuela política española, que en otras constituciones provinciales se señalan en forma explícita.

La representación provincial, por su parte, tiene dos funciones claramente determinadas: "nombrar la corporación del Cabildo por "el término acostumbrado" (art. 89), cumplido lo cual "fenece el "ejercicio de la representación" (art. 109), y acudir a la convocatoria del Gobernador, "en los casos" que éste "estime conveniente a la salud del país" (art. 22). Sus integrantes son elegidos, por un período de dos años, por los departamentos de la Capital, Ro^{rio}, Cor^{onda}, y San José del Rincón. Deberán reunirse los 14 ^{días} de enero de cada bienio, a fin de elegir a los cabildantes.

El Cabildo.

La institución capitular mantiene, en este Estatuto, "sin mengua o aumento en el uso conocido de sus funciones y ordenado por las "leyes" (art. 31), todas sus tradicionales atribuciones. Es, de todas las instituciones colegiadas, sin duda, la de mayor importancia ya que tiene la prerrogativa de asumir "el mando de la provincia "por ausencia del gobernador" (art. 32), y de substituirlo, en caso de muerte, durante el término de doce días, convocando a elecciones para su reemplazo constitucional.

La elección de los cabildantes está a cargo de la Junta Electoral, como ya vimos.

La Administración de Justicia, señala el Estatuto, "continuará "en lo sucesivo en el mismo orden que se ha guardado hasta el presente" (art. 34). Es decir, se encuentra a cargo de los Alcaldes de primer y segundo voto y demás cabildantes y con la intervención, especificada en cada caso, del Gobernador, en apelación o por propia competencia. Se mantienen, asimismo, las funciones de los alcaldes de hermandad y pedáneos, y de los alcaldes de barrio.

En esta sección sexta, que trata de la Administración de Justicia, se ha incluido un artículo breve pero de notoria importancia: "Queda abolida para siempre la tortura". (art. 35).

La Junta de Hacienda.

La Junta de Hacienda, presidida por el Gobernador "y compuesta "del alcalde de Primer voto, el procurador de la ciudad y el fiscal "de hacienda" (art. 43) lleva, trimestralmente, el contralor del "estado específico de los ingresos, inversiones y existencias de los "intereses que administra" cada Ministerio y recibe, de la administración "la cuenta anual documentada" (art. 44). Por último, "presentará los estados que obtenga del ministerio, por medio de copias "fijadas en lugares donde puedan ser observadas por los ciudadanos, "para acreditar el orden o integridad con que se administran los "intereses del Estado." (Art. 45).

Seguridad individual.

Los artículos de la sección octava establecen los preceptos habituales, ya por esta época, en las ordenaciones constitucionales, como ser, la protección de las leyes por igual para todos los ciudadanos, aunque el Estatuto santafecino agrega, notablemente, "sin distinción de clases" (art. 47); la inviolabilidad de la correspondencia epistolar; la prohibición del destierro; y la facultad de recurrir "hasta la última autoridad del país" para exigir reparación por la violación de estas garantías, así como la atribución a "cualquiera del pueblo", del derecho a reclamar contra dicha violación "aunque no sea infringido dicho artículo en su persona." (art. 56).

La ciudadanía.

Al igual que todas las constituciones provinciales de este período, la ciudadanía tiene un alcance continental. Así lo determina el artículo 3º del Estatuto: "Todo americano es ciudadano". Se refuerza esta significativa proyección política al establecer la pena de suspensión de esta ciudadanía para "cualquiera que por su opinión pública sea enemigo de la causa general de la América, o especial de esta provincia", "hasta que, abjurando con hechos sus errores, abraza la del territorio" (art. 5º).

Utras causas de suspensión de la ciudadanía se deben a la situación de "deudor al fondo público" que se encuentre bajo ejecución por tal motivo, y de "acusado de algún crimen, con prueba semiple-na" (art. 4º).

La religión.

El sostenimiento de la religión católica, apostólica, romana, es el primero de los preceptos que contiene este Estatuto. Los dos artículos que hacen referencia a la fe católica de la provincia, trasladan literalmente los similares contenidos en la constitución nacional de 1819, y mantiene la energía y el vigor con que se afirmaba la religiosidad de los pueblos argentinos en estos años.

Tucumán.

La provincia federal.

El gobernador intendente Bernabé Aráoz, que inaugura la serie de gobernantes de la Provincia de Estado de Tucumán, creada en 1814 por el Director Posadas, había sido reemplazado el 3 de octubre de 1817 por el coronel Feliciano de la Mota Botello, por orden del Directorio. Mota Botello fue puesto en su cargo por el general Belgrano, por entonces jefe del Ejército del Perú, acantonado en Tucumán.

En el año 1818, diversas divisiones del Ejército comandado por Belgrano se movilizan hacia Santa Fe, concluyendo por establecerse el cuartel general de dicho ejército en Córdoba, pronto a operar contra Estanislao López. El pronunciamiento de Arequito disgregaría al ejército nacional, y en su mayor parte, las fuerzas que lo componían seguirán al coronel Juan Bautista Bustos a Córdoba. En Tucumán, ese mismo año, siguiendo el proceso de desconocimiento de las autoridades de Buenos Aires, se produce un movimiento encabezado por los jefes de los cuerpos del Ejército del Norte que aún quedaban en Tucumán, Abraham González, Felipe Heredia y Manuel Caínzo, que depone al coronel Mota Botello y repone en el cargo de gobernador a Bernabé Aráoz.

La Circular del Cabildo de Buenos Aires del 12 de febrero de 1820 había anunciado a las provincias la disolución del gobierno directorial y, con él, la finalización del sistema de unidad dirigido desde la Capital. La nueva organización federal, que se reconocía como aceptada por todas las provincias, fue encarada entonces, en Tucumán, por el gobernador Aráoz quien dirigió un mensaje, en febrero de ese mismo año, al Cabildo de la capital provincial, solicitándole la convocatoria de electores de todos los distritos de la Intendencia para elegir representantes que sancionaran la Constitución de la Provincia y fijaran, de esta forma, "el destino provisorio que debe regirnos."

El 17 de mayo de 1820 se reúnen los diputados elegidos por Tucumán y Catamarca, sin la presencia de los de Santiago del Estero, que se había pronunciado por su propia autonomía, y constituyen el Congreso de la Provincia de Tucumán.

El Congreso Provincial elige presidente y titular del Poder Ejecutivo de la provincia al mismo Bernabé Aráoz. El 6 de septiembre siguiente, sanciona la Constitución de la República de Tucumán.

La Constitución de la República de Tucumán.

Su preámbulo fija el carácter local de esta Constitución, que erige a Tucumán en República por considerarla compuesta por las provincias de Tucumán, Catamarca y aun por la rebelde y separada Santiago del Estero, al declararse "República libre e independiente, unida sí con las demás que componen la Nación Americana del Sud", y al resolver que "entretanto el Congreso General de ella determine la forma de gobierno establece por medio de sus diputados para su interior administración la Constitución siguiente." (2)

El código tucumano se divide en cinco secciones, cada una de las cuales, a su vez, se subdivide en capítulos y éstos en artículos. Sigue en sus líneas generales muy estrechamente a la Constitución de 1819, de la cual ha tomado capítulos y artículos a la letra.

La Sección primera tiene un artículo único en el que se establece que: "La Religión Católica, Apostólica, Romana es la única Religión de la República, en cuya protección todas las autoridades emplearán su celo y sus habitantes toda veneración y respeto."

Las Secciones segunda, tercera y cuarta se refieren, respectivamente al poder legislativo, al poder ejecutivo y al poder judicial.

El capítulo primero de la sección segunda, correspondiente al poder legislativo, comprende cinco artículos, cuatro de los cuales son transcripciones de los artículos 4º, 6º, 8º y 9º de la Constitución de 1819. Establece este capítulo que el poder legislativo "se expedirá, por ahora, por un Congreso Provincial compuesto de un diputado del fuero común por cada Pueblo, y un eclesiástico que nombrará la representación de la Provincia." (art. 1º) §

Los diputados deberán tener 25 años cumplidos, ocho años de ciudadanía, un "conocido patrimonio, o en su defecto arte, profesión u "oficio útil" y no deberán tener empleo del poder ejecutivo (art. 2º).

Su mandato será de cuatro años (art.3º) y tienen el derecho,"así "como cualesquiera de los ciudadanos" de acusar ante el Congreso por violación de las leyes,a los miembros de los tres poderes (art.4º).

Se establece para su elección,en el capítulo II,el procedimiento prescripto por el Reglamento Provisorio de 1817,y se asigna al Congreso el examen de las actas correspondientes.

Las atribuciones del Congreso son materia del capítulo III y se establecen en veinte artículos,dieciséis de los cuales son transcripción directa de la Constitución de 1819,y uno de ellos con una ligera modificación. Las atribuciones son: las de juzgar a los acusados por diputados o ciudadanos ,por las transgresiones establecidas en la Constitución (art. 1º); nombrar su presidente y oficiales y formar el reglamento de sus debates (art.4º); hacer comparecer a los ministros del Poder Ejecutivo para solicitarle informes; exigir anualmente del poder ejecutivo la cuenta general de las rentas públicas,examinarlas y juzgarlas (art.8!); en forma privative,dictar las leyes que deben regir en la provincia, y corregir o reformar las anteriores (art.9º); decretar la guerra y la paz (art.10); establecer contribuciones (art.11); fijar,a propuesta del poder ejecutivo,la fuerza militar de la provincia, y,por sí,la guardia del Congreso (art.12); recibir empréstitos (art.13); establecer los procedimientos judiciales de todos los fueros (art. 14); fijar los límites de la provincia,de sus pueblos interiores y el rango de villas o ciudades que a ellos corresponde (art.16); formar planes de educación pública y proveer los fondos respectivos (art.17); otorgar patentes (art.18); "celar la calidad de la moneda,los pesos y las medidas" (art.19); "proveer los empleos de coronel para arriba hasta el grado que el Congreso declare admisibles en la Provincia"(art.20); por último,se establece una clara delimitación del orden provincial con el ámbito nacional,al que permanentemente se tiene por superior, en lo que respecta al comercio,determinando que esa atribución del Congreso Provincial "reglar el comercio interior y ordenar el exterior,de modo que no

"se perjudique en el tráfico común de las provincias y sin mezclarse
"en las providencias privativas del Congreso General de la Nación."
(art.15).

En el capítulo cuarto "De la formación y sanción de las leyes",
en que se sigue las disposiciones que al respecto contenía la cons-
titución de 1819, también se legisla sobre la reforma de la Constitu-
ción. En ese sentido se establece que la reforma se producirá por
iniciativa de un diputado apoyado por la mayoría del cuerpo y que
el respectivo proyecto deberá tratarse en dos sesiones distintas,
debiendo mediar entre cada una de ellas, por lo menos dos días.

En la sección tercera se establecen las condiciones de elegibili-
dad, la forma de elección y las atribuciones del poder ejecutivo,
así como también la de los "gobernadores-intendentes" de las ciuda-
des de la Provincia". El poder ejecutivo es confiado al Presidente
Supremo de la Provincia, que no podrá ser elegido como tal, sino re-
úne las condiciones de ser "ciudadano natural del territorio de
las Provincias Unidas", con siete años de residencia en la provincia
y 35 años de edad. Dura en su mandato cuatro años y es reemplazado
en caso de enfermedad, acusación o muerte, por el presidente del Con-
greso, hasta la elección de un nuevo gobernante.

⁸⁸
El Presidente/^{es}elegido por el Congreso Provincial y deberá reunir
unanimidad de sufragios para ser reelecto, lo que se permite por una
sola vez.

Las atribuciones del Presidente son las que señalan en la sección
III, capítulo III de la constitución de 1819 y en sus artículos 74,
75, 76, 77, 78 y 79, copiados a la letra de este código nacional. Se ha-
ce reserva, en ellos de las leyes generales de la Nación, ante las que
deberá ceder la provincia y se le reservan los ramos de Milicia, Go-
bierno y Hacienda, y el ejercicio del Patronato (arts. 1º, 6º, 7º y
8º; arts. 10 y 11; art. 13 y art. 12, respectivamente). También mantie-
ne el derecho de gracia y el de elzade en los delitos militares,
como los antiguos Gobernadores y Justicias Mayores, de las Leyes de
Indias.

En el juramento que presta, sigue también los lineamientos del
artículo 59 de la constitución de 1819, modificado en cuanto hace

referencia a la defensa, integridad e independencia del territorio de la Provincia "por ahora y en lo sucesivo bajo la forma de gobierno que prescribe la Nación". (art. 4º, cap. 1º)

Los Gobernadores Intendentes de Provincia, por su parte, siguen también el antiguo modelo castellano. Son nombrados por el Congreso Provincial a propuesta en terna del Presidente, quien a su vez la toma de la "lista de elegibles" que todos los ^{días} 1º de enero de cada año deberán pasarle las Cortes primeras de Justicia. Se les "exonera" de la "jurisdicción ordinaria, civil y criminal, entre partes y "de oficio", pero conservan "todas las facultades respectivas a "Gobierno, Policía, Hacienda y Guerra." No obstante la prohibición expresa de intervenir en los acuerdos de Justicia, se los faculta a hacerlo, suspendiéndolos, si del cumplimiento de ellos, se temiese la "subversión del orden público." Se suprime el empleo de Teniente Asesor de los Intendentes y se lo reemplaza por el de Secretario Letrado, que deberá ser nombrado por el Presidente de la República.

En la Sección quinta se trata del poder judicial. Dice al respecto Manuel Lizondo Borda: "Como Poder Judicial se establece una "Alta Corte de Justicia, 'compuesta por tres jueces y un fiscal de "lo civil y criminal'; y una 'Corte Primera de Justicia' en lugar "de los Cabildos o ayuntamientos o municipalidades, que quedan 'suprimidos y enteramente abolidos'. Pero los magistrados de esta "Corte Primera de Justicia, no son más que los alcaldes y regidores "antiguos, mal disfrazados bajo los nombres de 'primero y segundo "Ministros ordinarios de Justicia', de síndico promotor de los "derechos del pueblo, de ministro fiel ejecutor, de ministro de policía y ministro defensor de menores y pobres. Tan es así, que constituida esta Corte, sigue actuando exactamente lo mismo que el viejo Cabildo, en su Sala de Acuerdos; (...) Pues aunque la Constitución no dice nada al respecto, los señores ministros de la Corte "Primera de Justicia entendieron muy bien que su función no era "otra que la del antiguo ayuntamiento (y que la ciudad no podía que "der sin municipio)". (3)

Finalmente, en la sección quinta (aunque en el texto se repite la numeración de Cuarta) se establecen los derechos de la Provincia

y se transcriben los "derechos particulares" contenidos en la constitución de 1819. En cuanto a los primeros, se señala que es en la Provincia "en quien reside originariamente la soberanía" y que ésta se ejerce por una estricta división de poderes, que, como se ha visto, no es tal sino la vieja diferenciación de "ramos de gobierno" de la constitución castellana de la Conquista y Población.

Como apéndice a la Constitución se acuerdan medallas y cordones de oro para las autoridades, siguiendo siempre las disposiciones de la constitución de 1819, pero, para confirmar la vigencia de los principios de la constitución monárquica en los fundamentos de la nueva organización provincial, se establece que la medalla de oro que el Presidente deberá llevar "pendiente del cuello de un cordón de hilo de Oro y Plata" llevará las siguientes inscripciones: en su centro: Supremo, y "en la circunferencia: Gobierno, Policía, "Hacienda y Guerra de Tucumán".

En 1821, a raíz de una sublevación de Abraham González, es depuesto el presidente Aróz y, como señala el historiador antes citado: "Con su caída queda de hecho, sin efecto, la Constitución con todas "sus novedades o rarezas. Y se vuelve a lo de antes: el simple sistema del gobernador y del cabildo, con sus nombres de tales. Lo demás desaparece." (4)

Las leyes constitucionales de Tucumán.

No pasa mucho tiempo sin que Tucumán siga el ejemplo de Buenos Aires y otras provincias en la instauración de nuevas instituciones representativas. Es así que el 30 de abril de 1822, se instala la Junta o Sala de Representantes integrada por cuatro diputados representantes de la ciudad capital y uno por cada jurato (Juárez, Chiquiligasta, Río Chico, Trancas, Monteros y Burruyaco). Esta junta se disuelve al poco tiempo para volver a reunirse al año siguiente, el 6 de noviembre, en que elige su presidente. ⁽⁵⁾ El día 7 dicta su primera ley constitucional, declarándose investida de facultades extraordinarias y constituyentes, citando al gobernador y a las corporaciones de la provincia a prestarle juramento de obediencia (acto n.º 3, año 1823). Sucesivamente, entre los años 1823 y 1825 la